

Medellín, diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

Proceso	EJECUTIVO SINGULAR
Radicado	05001 31 03 002 2007 00205 01
Demandante	BANCOLOMBIA S.A.
Demandada	JORGE MAURICIO AYALA ANGARITA
Juzgado origen	TERCERO EJECUCIÓN CIVIL CIRCUITO MEDELLÍN

Decide la Sala la apelación interpuesta frente al auto del 18 de diciembre de 2020, mediante el cual se terminó por desistimiento tácito el proceso d la referencia.

1. ANTECEDENTES.

Actuando a través de apoderado judicial, la demandante promovió demanda ejecutiva a fin de que se librara mandamiento de pago en contra del demandado, tendiente al cobro de una suma de dinero, obligación garantizada en el pagaré No. 70560554.

El juzgado profirió sentencia el 26 de agosto de 2008, disponiendo seguir adelante con la ejecución, proceder con el avalúo y posterior remate de los bienes.

Las actuaciones subsecuentes de la demandante corresponden a designaciones de dependientes judiciales hasta el 19 de noviembre de 2014, cuando solicitó oficiar a varias entidades y le fue negada indicando que ello era de su carga y, también reposa en el expediente una nueva solicitud del 12 de enero de 2018 para oficiar a CFIN, la que también fue negada mediante auto del **22 de enero de 2018** por no obrar prueba de la gestión de la parte al respecto.

Finalmente, sin obrar más actuaciones que las indicadas en el expediente, el **18 de diciembre de 2020**, se dictó auto que terminó el proceso por desistimiento tácito.

2. LA APELACIÓN.

Contra la decisión, el demandante interpuso reposición y en subsidio apelación, concretando en su reparo al juzgado que el artículo 317 del Código General del Proceso, establece que el desistimiento tácito es decretado por encontrarse inactivo el proceso por más de dos años en el despacho, por lo que se entenderá que el demandante desiste del interés de continuar con el proceso, lo anterior es correcto bajo una mirada exegética de la norma.

Asegura el accionante que se está desconociendo un derecho cierto sobre una obligación clara, expresa y exigible en caso de declararse el desistimiento tácito, a pesar de que el proceso ya fue impulsado hasta la sentencia.

Así mismo, el accionante cita sentencia del Tribunal Superior de Medellín, mediante la cual se establece que es violatorio de la Constitución declarar el desistimiento tácito en juicios que cuentan con auto que orden de seguir adelante con la ejecución, pues ello implica un abierto desconocimiento de los principios de acceso a la administración de justicia y debido proceso.

El juzgado, mediante providencia del 12 de agosto de 2021, decidió no reponer, aduciendo que en el presente caso aplica la literalidad de lo dispuesto para el desistimiento tácito en el artículo 317, siendo el mismo decretado por la inactividad prolongada por parte demandante, la cual supera los dos años; a su vez indica que la exposición de motivos del CGP es clara en indicar frente al desistimiento tácito que la finalidad reside en erradicar de los anaqueles judiciales procesos carentes de impulso procesal o abandonados, los cuales atentan contra la eficacia de la administración de justicia y contribuyen a la congestión de los despachos judiciales. Por lo anterior, se concedió el recurso en efecto suspensivo.

Cumplido el trámite del artículo 326 del CGP, corresponde decidir.

3. CONSIDERACIONES.

3.1 COMPETENCIA.

Por disposición del artículo 321 del CGP, el recurso de apelación contra autos procede solamente en contra de aquellos que la misma norma relaciona o que precisan disposiciones especiales. En este caso, es la norma especial consagrada en el literal e) del numeral 2 del artículo 317 la que prevé la alzada frente a la decisión controvertida.

Para resolver, dispone el artículo 328 de la misma obra que, salvo decisiones que se deban adoptar de oficio, el superior debe limitar su análisis a las razones de inconformidad expuestas por el recurrente.

3.2 PROBLEMA JURÍDICO.

Le corresponde a la Sala determinar si en el presente caso aplica el desistimiento tácito por inactividad del proceso ejecutivo durante el plazo previsto en el artículo 317, numeral 2, literal b).

3.3 FUNDAMENTOS JURÍDICOS.

La norma referida sanciona con terminación del proceso por desistimiento tácito a la inactividad procesal superior a 2 años, cuando existe sentencia o auto de seguir adelante la ejecución, consecuencia que se puede evitar con “(c)ualquier actuación, de oficio o a petición de parte, de cualquier naturaleza”, de tal forma que está íntimamente ligada con el deber de vigilancia e impulso a cargo del interesado en el proceso¹.

Frente al desistimiento tácito, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia STC 1578 de 2018 indicó:

“... el legislador sanciona el descuido del proceso con su culminación, sobre todo cuando su impulso le incumbe a los litigantes, circunscribiendo la inactividad de aquél a dos eventos: a) la falta de peticiones que impulsen el negocio; o b) la ausencia de alguna actuación. La primera de ellas incumbe exclusivamente a los extremos del litigio. La última se refiere a las partes, al juez o a cualquier tercero que se espere participe de alguna manera en el procedimiento.

Aunado a lo anterior, no puede perderse de vista el literal «C» de la misma norma, el cual enseña que «cualquier actuación, de oficio o a petición de parte, de cualquier naturaleza, interrumpirá los términos previstos en este artículo», ya que tal expresión, esto es, «de cualquier naturaleza», parece incorporar el obrar que desplieguen terceros con ocasión de una orden dada de oficio o como consecuencia de un requerimiento de parte, como una circunstancia que interrumpe el lapso temporal que conlleva a la «extinción del proceso»”.

3.4 CASO EN CONCRETO.

Se aprecia en el expediente que la última actuación fue realizada el 22 de enero de 2018 y el auto que decreta el desistimiento tácito fue dictado el 18 de diciembre de 2020, esto es, superando con creces el término de 2 años, lo que evidencia una falta de diligencia de las

¹ Artículo 8 del CGP.

partes procesales, en particular de la demandante quien es la interesada en el recaudo.

En el mismo sentido, se observa que en los autos que negaron oficiar a entidades en procura de la identificación de los bienes del deudor, el juzgado le indicó al apoderado accionante que debía desplegar su actividad propia, consideración acorde con el deber consagrado en el numeral 10 del artículo 78 del CGP, que le impone a las partes abstenerse de solicitar la intervención judicial para procurar información que se puede recaudar en ejercicio del derecho de petición y que en línea con el numeral 4 del artículo 43 del mismo estatuto, viabiliza tal proceder solamente cuando la parte agotó infructuosamente la consulta; de tal forma que en este caso es claro que las escasas actuaciones de parte no prosperaron por ausencia de actividad de la ejecutante y, pese al requerimiento del juzgado para que adecuara su conducta, la actitud se mantuvo pasiva por un lapso superior al legalmente dispuesto, por lo que era viable la terminación del proceso por desistimiento tácito.

El recurrente refiere la sentencia C-553 de 2016 para afirmar que la aplicación del artículo 317 es subjetiva, desconociendo que en tal providencia la corte se declaró inhibida para pronunciarse al respecto, de tal forma que no constituye precedente al respecto que sirva de sustento.

Conforme a la jurisprudencia referida, la previsión del artículo 317 no vulnera el derecho de acceso a la justicia pues brinda oportunidad suficiente para que no se materialice la terminación por inercia al contemplar que cualquier actuación interrumpe el término para la configuración del desistimiento y no impide que se presente nuevamente la demanda transcurridos 6 meses desde la ejecutoria de la providencia.

En suma, es evidente que dada la inactividad procesal se debía aplicar la sanción estipulada por el legislador, por lo que, en mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Unitaria de Decisión Civil,

4. RESUELVE.

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia impugnada dentro del asunto de la referencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas en esta instancia.

TERCERO: REMITIR el expediente al Despacho de origen.

NOTIFÍQUESE



SERGIO RAÚL CARDOSO GONZÁLEZ
Magistrado